

**2021 SEP 24 PM 3:41**

**ASUNTO: SE PRESENTA ACCIÓN**

**DE INCONSTITUCIONALIDAD**

**OFICINA DE  
CERTIFICACIÓN JUDICIAL  
Y CORRESPONDENCIA**

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021

**MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN /**

Presente:

**José de Jesús Zambrano Grijalva** en mi calidad de Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática, personalidad que acredito en términos de la respectiva certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral que se acompaña al presente escrito; para que de forma conjunta o individual nos representen y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la representación del Partido de la Revolución Democrática, ubicada en viaducto Tlalpan número 100, edificio "A", planta baja, representación del Partido de la Revolución Democrática, colonia Arenal Tepic, Distrito Federal, y acreditando desde este momento, con fundamento en el artículo 11, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley, a los ciudadanos Licenciados [REDACTED]

[REDACTED] ante ustedes respetuosamente comparecemos a exponer:

Que por medio del presente escrito, con la representación que ostento, y con fundamento en el artículo 104 fracción VI, 105 fracción II, primer y segundo párrafos, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 10 fracción I; 11 en relación con el 59, 60, 62 tercer párrafo y demás relativos aplicables de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a interponer **DEMANDA DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD** en contra de la reforma del segundo párrafo del artículo 12;

párrafos primero y tercero fracciones 1, 11, 111 y VI del artículo 14; en donde se deroga el párrafo segundo del artículo 14; y el párrafo segundo del artículo 15; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en donde se establece como la facultad para modificar la integración del Congreso el cual se encuentra integrado por la Cámara de Diputados, la cual se compone por 35 diputados -electos cada tres años-, de los cuales 21 son electos por el principio de mayoría relativa y 14 por el de representación proporcional.

En cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 61 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de los ya asentados, manifiesto lo siguiente:

**ÓRGANOS RESPONSABLES.** - Lo son la Sexagésima Tercera legislatura del honorable Congreso del Estado de Tabasco, al emitir el Decreto 300, No.5108, publicado en el suplemento F, Edición 220, época 7ª, publicada en el Periódico Oficial de fecha 2126 de agosto de 2021.

El Licenciado. Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como autoridad que promulgó y publicó el Decreto 300, No.5108, publicado en el suplemento F, Edición 220, época 7ª, publicada en el Periódico Oficial de fecha 26 de Agosto de 2021, por el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 12; los párrafos primero y tercero fracciones 1, 11, 111 y VI del artículo 14; y se derogan el párrafo segundo del artículo 14; y el párrafo segundo del artículo 15; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

**NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA.** - El Decreto 300, No.5108, publicado en el suplemento F, Edición 220, época 7ª, publicada en el Periódico Oficial de fecha 26 de Agosto de 2021, mediante el cual propone reformar el segundo párrafo del artículo 12; los párrafos primero y tercero fracciones 1, 11, 111 y VI del artículo 14; y se derogan el párrafo segundo del artículo 14; y el párrafo segundo del artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Como se advierte la modificación se subsume en la idea falsa que el incremento de

diputados se debe al incremento de los habitantes, y no toma en cuenta que para realizar la modificación fue derivada del aumento de tres distritos para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y por ende se aumentó la representación proporcional señaladas en el Decreto 192, No.17414, suplemento 6284, época 6a, publicada en el Periódico Oficial de fecha 27 de Noviembre de 2002 se aumentaron tres distritos para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y por ende se aumentó la representación proporcional.

**MEDIO OFICIAL EN QUE FUE PUBLICADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.** - Periódico Oficial. Órgano de difusión oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Decreto 300, No.5108, publicado en el suplemento F, Edición 220, época 7ª, publicada en el Periódico Oficial de fecha 26 de agosto de 2021.

**PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS.** - Lo son los artículos 1, 16, 17, 41, base II, 116, base IV inciso b) y g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 inciso d), 26 b), 50 numeral uno, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos.

Lo anterior se fundamenta en los antecedentes y conceptos de invalidez, siguientes:

### **ANTECEDENTES**

1.- El 26 de agosto de 2021 se publicó en el Diario Oficial en el Estado de Tabasco el Decreto 300, No.5108, publicado en el suplemento F, Edición 220, época 7ª, en los términos siguientes:

### **DECRETO 300**

*ÚNICO.* - Se reforman el segundo párrafo del artículo 12; los párrafos primero y tercero fracciones 1, 11, 111 y VI del artículo 14; y se derogan el párrafo segundo del artículo 14; y el párrafo segundo del artículo 15; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue:

**Artículo 12.** -

...

*El Congreso se compone por 29 diputados electos cada tres años, 21 por el principio de mayoría relativa y 8 por el principio de representación proporcional; durante su gestión constituyen una Legislatura. Las elecciones serán directas y se apegarán a lo que disponen esta Constitución y las leyes aplicables.*

**Artículo 14.-** *La elección de diputados, propietarios y suplentes, según el principio de representación proporcional, será por lista de candidatos en una circunscripción plurinominal que comprende todo el territorio del Estado.*

*Se deroga*

*I. Para obtener el registro de su lista de candidatos, el Partido Político que lo solicite, deberá acreditar que participa con candidatos a Diputados por mayoría relativa en, por lo menos, las dos terceras partes de los Distritos Electorales uninominales;*

*11. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida para la lista de la circunscripción plurinominal, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, mediante la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:*

*a) al b) ...*

*III. Al partido político que cumpla con las dos fracciones anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación estatal emitida, el número de diputados de su lista de candidatos. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista correspondiente;*

*IV. a la V. ...*

*VI. En los términos de lo establecido en las fracciones 11, 111, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello, en proporción directa con la respectiva votación estatal emitida de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.*

**Artículo 15.-**

*I. a la V. ...*

*Se deroga*

#### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** *El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.*

**SEGUNDO.** Los diputados electos por el principio de representación proporcional que integran el congreso local, que resultaron electos el seis de junio de 2021 para el período 2021-2024, concluirán su cargo conforme al periodo establecido.

**TERCERO.** Dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán las reformas necesarias a la legislación que corresponda, a fin de armonizarlas con las disposiciones establecidas en el presente Decreto.

**CUARTO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

## CONCEPTOS DE INVALIDEZ

**NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA.** - Lo es la reforma del Decreto 300, No.5108, publicado en el suplemento F, Edición 220, época 7ª, publicada en el Periódico Oficial de fecha 26 de agosto de 2021 porque afectan el principio de representatividad en proporcional cuyo fin es proteger la expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, según su representatividad.

**PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS.** -Lo son los artículos 1, 14, 16, 41 base I, 116 base II, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La actual reforma que por este medio se recurre establece la modificación del precepto normativo en los términos siguientes:

### **Artículo 12.-**

...

*El Congreso se compone por 29 diputados electos cada tres años, 21 por el principio de mayoría relativa y 8 por el principio de representación proporcional; durante su gestión constituyen una Legislatura. Las elecciones serán directas y se apegarán a lo que disponen esta Constitución y las leyes aplicables.*

**Artículo 14.-** La elección de diputados, propietarios y suplentes, según el principio de representación proporcional, será por lista de candidatos en una circunscripción plurinominal que comprende todo el territorio del Estado.

Se deroga

*I. Para obtener el registro de su lista de candidatos, el Partido Político que lo solicite, deberá acreditar que participa con candidatos a Diputados por mayoría*

*relativa en, por lo menos, las dos terceras partes de los Distritos Electorales uninominales;*

*11. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida para la lista de la circunscripción plurinominal, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, mediante la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:*

*a) al b) ...*

*III. Al partido político que cumpla con las dos fracciones anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación estatal emitida, el número de diputados de su lista de candidatos. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista correspondiente;*

*IV. a la V. ...*

*VI. En los términos de lo establecido en las fracciones 11, 111, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello, en proporción directa con la respectiva votación estatal emitida de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.*

**CONSIDERACIONES JURÍDICAS.** - Las autoridades del Estado de Tabasco señaladas como responsables de la expedición y promulgación del Decreto 300, No.5108, publicado en el suplemento F, Edición 220, época 7ª, publicada en el Periódico Oficial de fecha 26 de Agosto de 2021, la reforma se realiza sin fundamentar y motivar las razones jurídicas y democráticas por las cuales desde su punto de vista tienen que realizarse, dado que con ello lo único que se pretende violar los principios de certeza, legalidad, objetividad y el principio de representación proporcional. Tal como consta en los numerales quinto, séptimo y octavo demuestran que la violación a la representación proporcional al omitir una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, así como para garantizar, en una forma más efectiva, el derecho de participación política de la minoría y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden producir en un sistema de mayoría simple. Al efecto es que se recurre a la siguiente jurisprudencia:

**MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.**

Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.

El Decreto 300, No.5108, publicado en el suplemento F, Edición 220, época 7ª, publicada en el Periódico Oficial de fecha 26 de agosto de 2021, viola lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que extralimitan su facultad al señalar:

**NOVENO.** Que por último, es de precisarse que con las adecuaciones constitucionales contenidas en el presente resolutive, se contribuirá al cumplimiento de las metas, objetivos y estrategias planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, el cual guarda congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; específicamente en su eje rector 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho, 1.3. Política y Gobierno, donde se plantea como visión que los ciudadanos seremos una sociedad plural,

*democrática, civilizada e inclusiva, con instituciones políticas legítimas y confiables, las cuales, en colaboración con los poderes, órganos autónomos, órdenes de gobierno y organizaciones civiles, implementarán políticas públicas consensuadas que darán solución efectiva a los problemas colectivos, contribuirán a la fortaleza del estado de derecho, a la reconciliación social, a la vigencia de los derechos humanos, y al ejercicio pleno de las libertades políticas de las y los ciudadanos.*

El órgano constituido en el Estado de Tabasco al emitir esta reforma afecta la organización interna del Congreso para el desahogo de los trabajos legislativos y conlleva a violaciones al ignorar que la ampliación de diputados señalada en el considerando sexto. del Decreto 192, No.17414, suplemento 6284, época 6a, publicada en el Periódico Oficial de fecha 27 de noviembre de 2002 únicamente se tomó como justificación el incremento de diputados al de los habitantes, resulta obsoleto y en el cual se estableció que:

***DÉCIMO.** Que por otra parte, conforme a los últimos censos, existe un aumento en la población y; debido a ello, se propone aumentar tres distritos para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa; por lo que de dieciocho que existen actualmente, se incrementarán a veintiuno, lo que trae como consecuencia, que se aumente también la representación proporcional de trece a catorce, por lo que la Cámara de Diputados quedará integrada por treinta y cinco miembros, debiéndose modificar en consecuencia los numerales que prevén esas hipótesis. Asimismo, siguiendo el criterio poblacional, se propone que en aquellos municipios de más de cien mil habitantes existan dos Síndicos para que las funciones de éstos sean más ágiles y eficientes, asignándoles a cada uno, sus atribuciones y obligaciones específicas, en la ley de la materia.*

No pasa a la vista de mi representado que el congreso hace caso omiso a la aplicación de dichas disposiciones y se escuda en que a partir de la libertad configurativa que tiene le tiene permitido no aplicar las reglas y principios de la Constitución Federal, mismas que no pueden contradecir pues en apariencia del buen derecho toman decisiones que a su juicio sean mejores para su régimen interno de gobierno, pretenden que el Estado pueda diseñar dispositivos innovadores –y por tanto, no previstos con anterioridad– para organizar su régimen interno, tutelar los derechos y libertades de sus habitantes y enfrentar así los retos específicos de su contexto social, cultural y político pero lo único que provocan es una distorsión jurídica y contraria a la Carta Magna.<sup>1</sup> En atención a lo anterior, resulta loable señalar lo siguiente:

**LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS.**

<sup>1</sup> En la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 5/2015, la SCJN consideró que el cálculo del financiamiento público para los partidos políticos, conforme al artículo 116, fracción IV, debe ser acorde a las bases generales previstas en la Constitución y Ley de Partidos, por lo cual las legislaturas de las entidades federativas, se deben ajustar invariablemente a los parámetros ahí establecidos.



*Si bien es cierto que los Congresos Estatales tienen libertad configurativa para regular ciertas materias, como la civil, también lo es que aquélla se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la legitimidad democrática de ciertos actos o hechos está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales.*

*Tesis: P./J. 11/2016 (10ª). Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Décima época,*

*Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I., José Ramón Cossío Díaz estimó innecesaria la votación. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.*

Ahora bien, discernir en cada caso concreto el alcance de la libertad de configuración de las entidades federativas es una labor compleja, pues depende de un multifacético conjunto de principios y reglas constitucionales que varían según la materia o tema de que se trate. En este sentido, encontramos que, aunque la libertad configurativa de las entidades federativas es un hecho, para ser coherente con nuestra alianza federal, tiene que ceñirse no sólo al régimen de distribución de competencias, sino también a los **principios constitucionales** conforme a los cuáles deben estructurar su régimen interior de gobierno y a **obligaciones específicas** para las entidades federativas en general.

Es claro que esas facultades pueden ser ejercidas mientras no contradigan o sean incompatibles con el contenido de la Constitución Federal. En esa medida, estimamos que la conclusión a la que aquí se ha arribado no desconoce dicha libertad configurativa, sino que el ejercicio legislativo emprendido por el Congreso en el Estado pasó por alto los principios y reglas que al respecto previó la Constitución Federal.

Tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 133 en relación con el 1º constitucional en el expediente varios 912/2010, fallamos la acción de inconstitucionalidad 8/2010 en la que se sostuvo que las entidades federativas tienen libertad configurativa para establecer tanto el diseño de su órgano de control constitucional local, como de los respectivos medios de control e impugnación que garanticen la superioridad constitucional en la

entidad, **siempre que se observe el marco federal**. En razón de lo anterior es necesario hacer alusión al siguiente criterio jurisprudencial:

Tesis jurisprudencial P. /J. 80/2004 del Tribunal Pleno, de rubro y texto: **"DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, para que respeten el principio de división de poderes, a saber: a) a la no intromisión, b) a la no dependencia y c) a la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante; la diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe.

En ese sentido, estos conceptos son grados de la misma violación, por lo que la más grave lleva implícita la anterior". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, p. 1122.

En efecto los Congresos de los Estados tienen la facultad configurativa para hacer modificaciones legales con fundamento en los artículos 1, 35, 41, 116 de la Constitución Federal, *ya que esa facultad no es irrestricta dado que se debe de respetar en todo momento la igualdad entre las leyes y sobre todo los derechos humanos con sus respectivos derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna*.

El Congreso de Tabasco tienen atribuciones de modificar las leyes en el Estado pero también es cierto que lo obliga a limitar las modificaciones –formales o interpretativas– al contenido de los derechos humanos ya sea en que aumente en sus derechos o en la eliminación de sus restricciones tal como ocurre en el caso que nos ocupa dado que se excede al legislar al afectar la organización interna del Congreso para el desahogo de los trabajos legislativos y conlleva a violaciones al artículo 36, fracción XLI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco pues no es una cuestión la "austeridad"

la que justifique la eliminación de los regidores dado que no existe causa de gravedad para que opere dicha modificación.

Motivo por el cual en el presente asunto se actualiza la causal de procedencia ya que es manifiesta e indudablemente una cuestión de naturaleza electoral ya que en el presente caso se refiere a aspectos vinculados directa o indirectamente con procesos electorales que influyen de una manera u otra en la distribución en concatenación con la vulneración del principio de representatividad proporcional vinculada con el financiamiento público a los partidos electorales en el presente caso se actualiza la procedencia de la acción ya que se trata de una materia electoral.

*Suprema Corte de Justicia de la Nación*

*Registro digital: 170703*

*Instancia: Pleno*

*Novena Época*

*Materias(s): Constitucional*

*Tesis: P./J. 125/2007*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 1280*

*Tipo: Jurisprudencia*

**MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.**

*Para determinar cuándo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia para resolver una controversia por no inscribirse ésta en la "materia electoral" excluida por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe evitarse la automática traslación de las definiciones de lo electoral desarrolladas en otras sedes procesales y aplicar sucesivamente los siguientes criterios: 1) es necesario cerciorarse que en la demanda no se impugnen "leyes electorales" -normas generales en materia electoral-, porque la única vía para analizar su constitucionalidad es la acción de inconstitucionalidad; 2) debe comprobarse que no se combaten actos y resoluciones cuyo conocimiento es competencia de las autoridades de justicia electoral, esto es, que no sean actos en materia electoral directa, relacionada con los procesos relativos al sufragio ciudadano; 3) debe satisfacerse el resto de las condiciones que la Constitución y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II de su artículo 105 establecen para que se surta la competencia del Máximo Tribunal del país -en particular, que se trate de conflictos entre los poderes públicos conforme a los incisos a) al k) de la fracción I del artículo 105 constitucional-. Así, la extensión de la "materia electoral" en sede de controversia constitucional, una vez considerados los elementos constitucionalmente relevantes, se sitúa en un punto intermedio entre la definición amplia que rige en las acciones de inconstitucionalidad, y la estricta aplicable en el juicio de amparo, resultando especialmente relevante la distinción*

*entre la materia electoral "directa" y la "indirecta", siendo aquélla la asociada con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional también especializado; por la segunda - indirecta-, debe entenderse la relacionada con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos los cuales, por regla general, involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios técnicamente electorales.*

*Controversia constitucional 114/2006. Municipio de Buenavista, Estado de Michoacán. 16 de agosto de 2007. Mayoría de nueve votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl Manuel Mejía Garza.*

Por otro lado, la reforma que pretende sea aplicada en el Estado, viola lo dispuesto el artículo 133 de la Constitución Federal dado que señala la Supremacía que debe ser respetada por los Congresos de los Estados y hacer sus reformas respetando los principios fundamentales de los ciudadanos y el sistema democrático en el que exista una participación plural y equitativa en los distintos órdenes de gobierno que existe en el país.

**Artículo 133.** *Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.*

Al respecto el poder constituido en el Estado se excede en la reforma que por este medio se recurre al no respetar lo dispuesto por el poder constituyente en la Constitución Federal afectando con ello el aforismo de que nada por encima de la Carta Magna pues de lo contrario se afectaría al sistema de gobierno aceptado por el pueblo de México.

Razones por las que esta H Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar inconstitucional las reforma que se recurren. Lo anteriormente señalado lo demuestro con las siguientes:

## PRUEBAS

1. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA.** - El Decreto 192, No.17414, suplemento 6284, época 6a, publicada en el Periódico Oficial de fecha 27 de Noviembre de 2002. El cual puede visualizarse en la siguiente página electrónica <http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/2002/201.pdf>
2. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA.** - El Decreto 300, No.5108, publicado en el suplemento F, Edición 220, época 7ª, publicada en el Periódico Oficial de fecha 26 de Agosto de 2021. El cual puede visualizarse en la siguiente página electrónica 2415 (tabasco.gob.mx)
3. **LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA,** en todo lo que beneficie los intereses de mi representada.
4. **LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** - Consistente en todas las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente juicio, en todo lo que beneficie a la entidad de interés público que represento.

Por lo antes expuesto y fundado, atentamente solicito:

**PRIMERO.** - Tener por reconocida la personalidad de quien suscribe el escrito, asimismo tener por designados y acreditados delegados en el presente asunto.

**SEGUNDO.** - En su oportunidad, dar vista a las autoridades responsables para enterarlos de ésta y requerirlos para que rindan el informe a que se refiere el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desahogando el procedimiento respectivo.

**TERCERO.** - Dictar resolución, declarando la invalidez de las normas impugnadas

Protestamos lo necesario

  
**José de la Cruz Zambrano Grijalva**  
Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática

015006

SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION

2021 SEP 24 PM 4 30

OFICINA DE CERTIFICACION  
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido mediante buzón Judicial en (14) fojas con:-  
-(1) anexo en copia simple en (1) foja.  
- copia simple del periodico oficial del estado de  
tabasco de fecha 26 de Agosto 2021 en un total  
de (15) fojas.

Nota.- el presente asunto se recibe en copia simple. *Elu.*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

# CONTENIDO DEL DOCUMENTO

NOMBRE DEL PROMOVENTE: Partida de la  
Revolucion Democrática

NÚMERO DE COPIAS: 14 fajas escrito Original

NÚMERO DE ANEXOS: 16 fajas anexo

FOLIO: 15176



cfce3dd144c3d1d2a8b789b2f4ac9e41e26f4cf31a80cdd1813e7f9e51f61d4d